CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2026

ACTOR: PODER EJECUTIVO FEDERAL

PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA

SECRETARIA: IVAN DAVID GONZÁLEZ CHÁVEZ
SECRETARIA AUXILIAR: MARCELA GUADALUPE SERRATO CORTÉS
COLABORÓ: JAVIER VALERA ORTIZ

SÍNTESIS

El Poder Ejecutivo Federal impugnó el artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

La norma impugnada establece un pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento de centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores, o similares, así como de las edificaciones para la extracción de gas natural y gas no asociado, respecto del cual el Poder Ejecutivo Federal refiere que la norma impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación en materias de hidrocarburos y de energía eléctrica.

ÍNDICE TEMÁTICO

Apartado		Criterio y decisión	Págs.
I.	**COMPETENCIA**	El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es competente para conocer del presente asunto.	**10**
II.	**PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS**	El Poder Ejecutivo Federal impugna el artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2, y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026.	**10-11**
III.	**OPORTUNIDAD**	La demanda se presentó de manera oportuna.	**11**
IV.	**LEGITIMACIÓN ACTIVA**	El Poder Ejecutivo Federal, que presentó el escrito de demanda, cuenta con legitimación activa.	**11-13**

V.	**LEGITIMACIÓN PASIVA**	Los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados cuentan con legitimación pasiva.	**13**
VI.	**TERCERAS INTERESADAS**	Las Cámaras de Diputados y de Senadores cuentan con legitimación para comparecer como terceros interesados. El Municipio de Morelos no compareció.	**13-14**
VII.	**CAUSAS DE IMPROCEDENCIA**	Se desestiman las causas de improcedencia.	**14-15**
VIII.	**ESTUDIO DE FONDO**	Se declaran **fundados** los conceptos de invalidez.	**15-24**
IX.	**EFECTOS**	La invalidez declarada surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.	**24-26**
X.	**DECISIÓN**	**PRIMERO.** Es **procedente y fundada** la presente controversia constitucional. **SEGUNDO.** Se declara la **invalidez** del **artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2, y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco. **TERCERO**. Se declara la **invalidez**, por extensión de los **artículos 20, fracción V y 36 fracción XI, numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco. **CUARTO**. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos precisados en el apartado VIII de esta determinación.	**26**

		QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta	

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2026

ACTOR: PODER EJECUTIVO FEDERAL

VISTO BUENO
SRA. MINISTRA
PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA
COTEJÓ
SECRETARIA: IVAN DAVID GONZÁLEZ CHÁVEZ
SECRETARIA AUXILIAR: MARCELA GUADALUPE SERRATO CORTÉS
COLABORÓ: JAVIER VALERA ORTIZ

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de esta SCJN, en sesión correspondiente al ********** de ********** de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve el expediente relativo a la controversia constitucional 91/2026, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que se demanda la invalidez del artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial local el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES

1. **Presentación de la demanda.** El trece de febrero de dos mil veintiséis, el Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza, en la que impugnó el artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2, y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial local el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

2. **Conceptos de invalidez**. En su escrito de demanda, la parte accionante hizo valer tres conceptos de invalidez, en los que, en esencia, alegó que la norma impugnada vulneró la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, establecida en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto y séptimo; 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o y 5o., incisos a y c, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), además de vulnerar la dignidad humana, reconocida por el artículo 1o. del texto constitucional por lo siguiente:

    - El artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, establece cobros por la expedición de licencias de funcionamiento de edificaciones destinadas a la extracción de gas natural y gas no asociado, la cual es materia de hidrocarburos, cuya competencia está reservada exclusivamente a la Federación, de acuerdo con los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX de la CPEUM.

- El Gobierno Federal ostenta la propiedad y el control de las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, sin que estas funciones se entiendan como una actividad monopólica. Por ello, únicamente la Federación puede establecer reglas y condiciones respecto a las asignaciones, contratos y concesiones que se otorgan a los particulares o sociedades constituidas.

- La competencia federal en materia de hidrocarburos se aprecia desde dos perspectivas. La primera, en la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión, conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 2o. del artículo 73, de la CPEUM y la segunda, se delinea en la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia que ostenta el Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, conforme con el artículo 166 de la Ley del Sector de Hidrocarburos.

- La norma impugnada, al crear contribuciones al margen del diseño federal, distorsiona el equilibrio contributivo y propicia una doble imposición incompatible con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria regulados en la fracción XXIX del Artículo 73 de la CPEUM, la parte actora sostiene que el establecimiento de cargas municipales sobre actividades propias de la industria de hidrocarburos desconoce las atribuciones federales y el sistema de coordinación fiscal. Los municipios ya participan en los ingresos públicos federales a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mediante el régimen de participaciones. Por tanto, permitir que los municipios, además, establezcan o impongan contribuciones relacionadas con la materia de hidrocarburos rompería el equilibrio en la distribución de competencias tributarias.

- La Ley del Sector de Hidrocarburos establece que corresponde exclusivamente a la Federación legislar, en materia de contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a las actividades de reconocimiento, explotación, tratamiento, refinación, enajenación, comercialización y almacenamiento de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. Las entidades federativas se encuentran excluidas de estas facultades, por lo que deben atender únicamente a aquellas que les confiere el texto constitucional para su esfera local, acorde con las facultades expresamente conferidas a la federación, en términos del artículo 73 en relación con el 124 Constitucional.

- De acuerdo con el artículo 115, fracción V, incisos a, d y f de la CPEUM, es facultad de los municipios formular, aprobar, administrar, autorizar, controlar y vigilar la utilización del uso suelo, y otorgar licencias o permisos para las construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial, observando los términos de las leyes federales y estatales relativas.

- La parte actora sostiene que las facultades municipales en materia de uso de suelo no pueden ejercerse de manera que interfieran con la regulación federal de las actividades de la industria de hidrocarburos. En ese sentido, refiere que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las autoridades competentes, otorgar los permisos necesarios para desarrollar las actividades de dicha industria. Por tanto, los municipios quedan excluidos de la facultad de conceder licencias y permisos para el desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos.

● En ese sentido, señaló que la facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso de suelo y de permisos de construcción no alcanza para recaudar contribuciones impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos. Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por la expedición de una licencia de funcionamiento, debido a que establece el cobro de una tarifa por las edificaciones para la extracción de gas natural y gas no asociado.

- En el área de asentamiento humano, los municipios poseen facultades, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-C y 115, fracción V, de la CPEUM, y se desarrollan en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano. Dentro de dichas facultades se encuentran las de regular, controlar y vigilar las reservas, uso de suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio; sin embargo, esta facultad se encuentra restringida por las leyes federales que regulan materias reservadas a la Federación, especialmente en materia de hidrocarburos y protección al ambiente.

- Por esa razón, el municipio vulnera las facultades del legislativo federal en materia de contribuciones respecto a las actividades derivadas por la explotación de hidrocarburos, por otra parte, invade la competencia del ejecutivo federal sobre la ejecución y vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos de hidrocarburos, dado que la licencia de funcionamiento, además de constituir el pago de una contribución, sirve para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas dentro de la esfera territorial del municipio, a fin de que ese establecimiento continue con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación pues constituye en una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos, cuya competencia es federal.

- El artículo 36, fracción XIV, numerales 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, regula en materia de energía eléctrica, cuya competencia está reservada exclusivamente a la Federación, contenida en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso a, de la CPEUM.

- La competencia federal en materia de energía eléctrica se encuentra configurada con base en dos principios. El primero, en la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión, conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso a, del artículo 73 de la CPEUM y el segundo, se delinea en la facultad de ejecución y vigilancia de las normas de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, acorde con los artículos 6, 13, 14 y 15 de la Ley del Sector Eléctrico.

- La Ley del Sector Eléctrico indica que las acciones que comprenden la producción de energía eléctrica son de jurisdicción federal, por lo que mandata a las autoridades administrativas y jurisdiccionales que prevean lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades.

- La federación tiene la exclusiva competencia para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional; el servicio público de transmisión y distribución, y de las demás actividades de la industria eléctrica, y el desarrollo sustentable de la industria eléctrica.

- Las entidades federativas quedan excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en materia energética, por lo que deben atender únicamente a las atribuciones que les confiere el texto constitucional para su esfera local, en la vertiente legislativa y ejecutiva, acorde con la interpretación en sentido contrario del artículo 124 Constitucional.

- De acuerdo con el artículo 115 de la CPEUM, es facultad de los municipios autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, y otorgar licencias o permisos para las construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial, observando los términos de las leyes federales y estatales relativas.

- La aludida facultad es limitada por las regulaciones federales, por tratarse de materias reservadas, como acontece en la Ley del Sector Eléctrico, pues instituyen los términos y condiciones jurídicas que deben satisfacerse para el uso de suelo en la industria eléctrica.

- El artículo 57 de la Ley del Sector Eléctrico, señala que el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se considera de interés social, orden y utilidad pública, por lo que tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas: sujetos a servidumbre legal los predios necesarios para la instalación de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución.

- El artículo 88, párrafo tercero de la ley en la materia, señala que los gobiernos de los estados y de los municipios deben contribuir al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de sus competencias.

- Existe regulación de uso de suelo para llevar a cabo las actividades derivadas de la industria de eléctrica, de conformidad con los permisos autorizados por la Federación, la cual se encuentra en los artículos 5, fracción X, 6, 7, fracción XVI, 8, fracción II, 11, fracción III, inciso f, 35 BIS 2 y BIS 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 2 y 5, inciso k de su reglamento, cuyas competencias han quedado establecidas en la esfera del Poder Ejecutivo Federal para el cambio de uso de suelo, lo que restringe de manera absoluta la multicitada facultad constitucional municipal.

- En materia de energía eléctrica, la facultad legislativa, contributiva y ejecutiva la ostenta exclusivamente la Federación en todas sus vertientes, a pesar de que los municipios tengan la facultad constitucional de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo.

- Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de esta industria, si prevé un pago de derechos por la expedición de licencia de funcionamiento debido a que establece el cobro de una tarifa por la

edificación productora de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares.

• Por esa razón, el municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal, porque este no tiene las facultades de regular e imponer contribuciones en las actividades de la industria eléctrica.

- El municipio, al imponer cobros por el otorgamiento de licencias de funcionamiento a empresas que prestan servicios de hidrocarburos y de generación de energía eléctrica, vulnera el principio de dignidad humana al poner en riesgo la accesibilidad y asequibilidad de servicios esenciales. La parte actora sostuvo que los cobros previstos en la norma impugnada no solamente generan una invasión competencial, sino que también pueden repercutir en el acceso a bienes y servicios indispensables para una vida digna. Asimismo, señaló que las cargas económicas impuestas a quienes desarrollan actividades en esos sectores pueden trasladarse a los usuarios finales, lo que puede generar barreras económicas y afectar las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de los derechos humanos.

3. **Radicación y turno.** Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiséis, la Presidencia de esta SCJN tuvo por recibido el escrito de demanda, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la **controversia constitucional 91/2026** y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.

4. **Admisión y trámite**. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza para que contestaran la demanda en el plazo de treinta días hábiles. Tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, a los que se ordenó dar vista con la demanda para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en el plazo de treinta días. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que resultara conveniente.

5. **Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado).** El dieciséis de abril de dos mil veintiséis, la Presidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rindió manifestaciones en calidad de tercero interesado y expuso medularmente lo siguiente:

- El artículo 124 Constitucional establece que existen competencias expresas a favor de la Federación y residuales tratándose de los estados.

- En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX de la CPEUM, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de energía eléctrica e hidrocarburos; así como establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación, entre los que se encuentran los derivados del petróleo.

- En este sentido, el fondo de la litis constitucional se centrará en determinar si la Ley de Ingresos del Municipio Morelos, Coahuila de Zaragoza; resulta

contraria a los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto 73, fracciones X y XIX, numerales 2o. y 5o.; así como 124 de la CPEUM, en relación con la regulación de contribuciones en materia de energía eléctrica e hidrocarburos.

6. **Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado).** El veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado, y expuso diversos argumentos por los que sostuvo la invalidez del Decreto impugnado:

- El artículo 27, primer párrafo de la CPEUM indica que la nación es propietaria originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio, por lo que su explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales, son del dominio directo de la Nación el cual es inalienable e imprescriptible, facultad donde se encuentran comprendidos los hidrocarburos.

- De una interpretación sistemática de los artículos 25, cuarto párrafo, y 28, cuarto párrafo de la Constitución se desprende que la exploración y extracción de hidrocarburos constituyen un área estratégica del Estado mexicano, que el sector público ejerce de manera exclusiva, sin que ello constituya un monopolio, lo cual realizará mediante la dependencia encargada de conducir, supervisar y regular, técnica y económicamente, la política energética del país.

- La Ley del Sector Hidrocarburos establece que le corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional; además, reitera que las actividades de exploración y extracción de dichos recursos se consideran estratégicas.

- La fracción X del artículo 73 de la CPEUM faculta de manera expresa al Congreso de la Unión para legislar sobre las materias de hidrocarburos, asimismo, dota de potestad al constituyente para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de dichos recursos naturales.

- Las fracciones IV y V del artículo 115 de la CPEUM, regulan la función municipal, señalando que los municipios tienen la potestad de administrar libremente su hacienda, la cual se conformará por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones e ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, estando facultados para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, además de otorgar permisos y licencias de construcciones de su competencia, entre otras atribuciones, excluyendo de estas actividades a las reservadas exclusivamente a la Federación.

- Los artículos impugnados a la entidad federativa, invaden las esferas competenciales de la Federación, previstas en los artículos 25, 27, 28 y 73 del ordenamiento constitucional toda vez que los municipios no tiene facultades para la expedición de licencias de uso de suelo y de permisos de construcción impuestos a la cadena de valor de los hidrocarburos, ya que si

> bien es cierto que el artículo 36, fracción XIV, numerales 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé el pago de derechos por la expedición de una licencia de funcionamiento para la extracción de gas natural o gas no asociado.

- De acuerdo con los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto, 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a, de la CPEUM, corresponde al Estado, en forma exclusiva, la generación, transformación y distribución de la energía eléctrica, por lo tanto, el Congreso de la Unión y la Federación son los únicos facultados para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar en el ámbito de sus competencias el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a la planeación del control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio de transmisión y distribución de las actividades de la industria eléctrica y el desarrollo sustentable de ésta, en este sentido, las entidades federativas quedan excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en materia energética.

- De conformidad con el artículo 124 Constitucional, se establece que las facultades que no se encuentren expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas para las entidades federativas. Por lo tanto, las atribuciones que se otorguen de manera expresa a la Federación no pueden ser ejercidas por los estados. En relación con lo anterior, debe tenerse presente que conforme al artículo 73, fracción XXIX, sección 5o., inciso a, el Congreso de la Unión es el facultado para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Por lo que, las entidades federativas no pueden gravar el consumo de dicha energía.

- En el asunto en concreto, si bien la norma impugnada no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de esta industria, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento de instalaciones de generación de energía y de extracción de gas.

- Si la norma en análisis tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio, un servicio relacionado con la regulación en materia de energía eléctrica, exclusivo de la Federación, resulta claro que el Congreso local invadió las facultades de esta, ya que no puede realizarse una doble tributación de dicha actividad, ni regular e imponer contribuciones en las actividades de la industria eléctrica.

- En conclusión, la entidad federativa demandada, invadió las esferas competenciales de la Federación; razón por la cual, es inconstitucional el Decreto 358 mediante el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, específicamente el artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2 y 3 ya que transgrede el ámbito competencial del Congreso de la Unión, así como del Poder Ejecutivo Federal.

7. **Contestación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.** El veintisiete de abril de dos mil veintiséis, el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, depositó en la oficina de Correos de México, el escrito de contestación de la demanda y fue recibido el catorce de mayo del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN. En él expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:

   - De conformidad con el artículo 124 de la CPEUM, el sistema de distribución de competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y la Ciudad de México.

   - El artículo 115, fracción V de la CPEUM otorga expresamente a los municipios diversas facultades, entre ellas las de otorgar licencias y permisos de uso de suelo que controla. Dicha atribución constitucional implica que las legislaturas estatales, en su calidad de órganos normativos locales, tienen la potestad de establecer disposiciones que regulen el ejercicio de esta competencia municipal. En consecuencia, el ejercicio de esta facultad no constituye una invasión de competencias, sino que representa una manifestación legítima del marco constitucional de distribución de competencias previsto por la propia CPEUM.

   - La autorización del uso de suelo constituye una facultad conferida por el propio Constituyente reformador a los municipios, a fin de que puedan expedir, entre otras cosas, licencias para vigilar el uso de suelo que les permitan ejercer funciones de control y vigilancia sobre el desarrollo urbano. Esta atribución resulta fundamental para garantizar un crecimiento ordenado de la infraestructura municipal, asegurando que las obras y construcciones se realicen con las medidas de protección necesarias, en beneficio del desarrollo armónico y del interés general de la sociedad.

   - Diversos precedentes de la SCJN han sostenido que la emisión de leyes por parte de Legislaturas locales que contemplen el pago de licencias de funcionamiento a diversas construcciones no invade la esfera competencial de la Federación, pues únicamente se trata de derechos derivados del control ambiental que pueden ejercer los municipios para vigilar el uso de suelo, cuya facultad se concede a los congresos estatales.

   - No se configura una invasión de esferas competenciales por la mera existencia de derechos que corresponden legalmente a las autoridades estatales o municipales y su convivencia con actividades reservadas a las autoridades federales, pues como se puede apreciar, lo que en el presente caso se grava en favor de los municipios es la expedición de licencias para vigilar el uso de suelo.

   - La competencia de los municipios para expedir licencias, permisos y ejercer funciones de control ambiental se encuentra plenamente fundada tanto en el marco constitucional como en los instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado mexicano. Es justo en la posibilidad de expedir licencias de control ambiental que el Estado mexicano cumple con el principio de prevención y con sus obligaciones en materia de protección ambiental, pues con su expedición se vela porque las

actividades realizadas dentro de su territorio no causen un daño al medio ambiente.

- Negar a los municipios esta facultad, bajo el argumento de una distribución de competencias, no solo contraviene dichos mandatos, sino que vulnera los principios de precaución y prevención ambiental reconocidos por la SCJN y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- Permitir y fortalecer el ejercicio de estas competencias municipales no solo es legítimo, sino indispensable para garantizar efectivamente el derecho humano a un medio ambiente sano y para evitar daños irreparables a los ecosistemas y a las comunidades que de ellos dependen y de esa forma el Estado mexicano se encontraría cumpliendo con sus compromisos internacionales relacionados con la protección al medio ambiente.

8. **Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.** El veintitrés de abril de dos mil veintiséis, el Consejero Jurídico del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, depositó en la oficina de Correos de México, el escrito de contestación de la demanda y fue recibido el seis de mayo del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN. En él expuso los siguientes argumentos para sostener la validez de la norma impugnada:

   - La controversia constitucional es infundada, ya que, siendo una facultad del Poder Ejecutivo como autoridad promulgadora, es necesario establecer que en la presente controversia respecto de la cual se informa, no se atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las normas impugnadas, por lo tanto, se sostiene la validez de estas, por lo que hace al Ejecutivo del estado.

   - La orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a lo remitido por el Congreso local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo estatal da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial del estado; lo anterior, son requisitos indispensables de fundamentación y motivación de dichos actos, y solo se requiere que provengan de una autoridad competente para ordenarlos y que se cumplan con las formalidades exigidas por la ley para ello, a fin de que la nueva ley, o sus reformas, puedan ser conocidas; requisito que en el presente caso se cumplieron, pero solo como una formalidad que la propia ley suprema determina. Lo que confirma lo argumentado en el punto anterior, razones por las que se reitera lo infundado de la controversia constitucional, por lo que hace al Ejecutivo del estado.

9. **Manifestaciones de la FGR.** No se emitió opinión en este asunto.

10. **Audiencia.** Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintiséis de junio de dos mil veintiséis, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, se hicieron constar los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión y se puso el expediente en estado de resolución.

11. **Cierre de instrucción.** Por acuerdo de dos de julio de dos mil veintiséis, la Ministra instructora cerró la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. El Pleno de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a, de la CPEUM[1] y 16, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF),[2] publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,[3] del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco del Pleno de esta SCJN, en virtud de que el Poder Ejecutivo Federal impugnó una norma general emitida por el Congreso de una entidad federativa.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

13. En términos del artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia,[4] la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente controversia constitucional.

14. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna el artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial local el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, que ordena lo siguiente:

> **SECCIÓN VI**
> **POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y SERVICIOS DE CONTROL AMBIENTAL**
>
> **Artículo 36.-** Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales:
>
> I. a XIII. (…)
>
> (…)

---

[1] **Artículo 105.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (…)
a) La Federación y una entidad federativa; (…)

[2] **Artículo 16.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada; […]

[3] **SEGUNDO.** Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM, así como los recursos interpuestos en éstas. […]

[4] **Artículo 39.** Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

> XIV- Por la expedición de Licencia de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas natural y gas no asociado, se cobrará anualmente la siguiente tarifa:
>
> 1.- Edificación productora de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogenerador o similares, $41,846.00 por cada aerogenerador o unidad.
>
> 2.- Edificación para la extracción de Gas Natural $41,846.00 por cada unidad.
>
> 3.- Edificación para la extracción de Gas No Asociado $41,846.00 por cada unidad.

15. En cuanto a la existencia de dicha norma, debe decirse que ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

III. OPORTUNIDAD

16. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia en sus fracciones I y II[5] establece el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, los que deberán computarse de la siguiente manera:

    a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

    b) A partir del día siguiente al que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

17. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugnó el Decreto número 358 con motivo de su publicación el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, por lo que el plazo legal de treinta días hábiles **transcurrió del dos de enero al dieciséis de febrero de dos mil veintiséis**.[6]

18. Por lo tanto, si la demanda se presentó el **trece de febrero de dos mil veintiséis,** se determina que la controversia constitucional que nos ocupa se promovió de manera **oportuna.**

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

19. La presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la invasión a la esfera de competencias federales derivada de la emisión del Decreto 358, mediante el cual se expidió la Ley de

---

[5] **Artículo 21.** El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

[6] Se descuentan los días dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro por tratarse del segundo período vacacional correspondiente a esa anualidad, de conformidad con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los días uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de enero y uno, dos, tres, cinco, ocho y nueve de febrero, todos del dos mil veinticinco, por haber sido inhábiles, según el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, cuyo artículo 36 fracción XIV, numerales 1, 2 y 3, establece un pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores, o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas natural y gas no asociado.

20. Esta SCJN ha reconocido facultades al Poder Ejecutivo Federal, para acudir en defensa de los intereses de la Federación, como consta en el criterio 2a. XLVII/2003.[7]

21. El escrito de demanda fue suscrito por la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento de dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco, emitido por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

22. Al respecto, el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la materia establece lo siguiente:

> **Artículo 11.** (…)
>
> La persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos será representado o representada por el secretario o secretaria de estado, por el jefe o jefa del departamento administrativo o por el Consejero o la Consejera Jurídica del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente o Presidenta, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estas personas servidoras públicas y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

23. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone:

> **Artículo 43.** A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
>
> (…)
>
> **X.** Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios y procedimientos en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. En el caso de los juicios y procedimientos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;

24. Finalmente, el punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el DOF el nueve de enero de dos mil uno señala lo siguiente:

> **ÚNICO.** El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha

[7] Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, abril de 2003, página 862, de rubro: **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN**.

representación a algún otro servidor público.

25. De las disposiciones anteriores, se advierte que la persona titular de la Consejería Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta SCJN. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, se concluye que la presente controversia constitucional fue promovida por parte legitimada.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

26. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, debido a que se les atribuye la emisión de las normas impugnadas.

27. En representación del Poder Legislativo local compareció César Mario Esquivel Flores, en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos del Congreso de la entidad, quien demostró su personalidad con la copia certificada de su nombramiento de trece de agosto de dos mil veinticinco expedido por la Presidenta de la Junta de Gobierno de ese órgano legislativo y con el acuerdo emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva a través del cual le otorga un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración.

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Presidenta de la Mesa Directiva ejerce la representación legal y la puede delegar en cualquiera de los titulares de los órganos técnicos por medio del poder legal respectivo, de ahí que la citada autoridad cuenta con legitimación pasiva en este asunto.

29. Por su parte, en representación del Poder Ejecutivo local compareció Juan Pablo Alvarado Cepeda en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, quien acreditó tal personalidad con la copia certificada de su nombramiento del seis de agosto de dos mil veinticinco, y en términos del artículo 25, fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado, el mencionado funcionario cuenta con la atribución para representar al titular del Ejecutivo local en las controversias a que se refiere el artículo 105 de la CPEUM, en consecuencia, cuenta con legitimación pasiva en este expediente.

VI. TERCERAS INTERESADAS

30. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión compareció por conducto de la Presidenta de su Mesa Directiva, lo que acredita con el Diario de los Debates de dicha Cámara de dos de septiembre de dos mil veinticinco, en donde consta su nombramiento; y en términos de los artículos 22, numeral 1, y 23, numeral 1, inciso l de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ejerce la representación legal de dicha autoridad legislativa.

31. Por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión compareció por conducto de un Delegado designado por la Presidenta de su Mesa Directiva, lo que acredita mediante Oficio LXVI/DAyCC/0026.08.CC/2026, así como el acta de la Junta Previa,

de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura del órgano legislativo, mediante el cual se hace contar el nombramiento de dicha presidencia; con fundamento en los artículos 62, numeral 1, y 67, numeral 1, inciso I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ejerce la representación legal de dicha autoridad legislativa.

32. Por su parte, al Municipio de Morelos se le reconoció el carácter de tercero interesado mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis; sin embargo, no compareció al procedimiento.

VII.CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

33. Las cuestiones relativas a la procedencia de la controversia constitucional son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que esta SCJN advierta de oficio.

34. Si bien no lo alega como causal de improcedencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza sostiene que su participación en el proceso de creación de la norma combatida se limitó a su promulgación y publicación, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, razón por la cual sostiene la validez de tales actuaciones.

35. Dicho argumento debe desestimarse, dado que, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en su emisión, por lo que debe responder por la constitucionalidad de sus actos, siendo aplicable por analogía el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 38/2010 de rubro: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES**.[8]

36. De igual forma, pese a que no se argumentó como causal de improcedencia de manera expresa, se aprecia que en su contestación de demanda el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza señaló que no se formuló concepto de invalidez contra la promulgación de la norma impugnada.

37. Esta causal se desestima porque el Poder Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del Decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de ser analizadas por esta SCJN, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia.

38. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO**

[8] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, abril de dos mil diez, página 1419, registro 164865.

> **ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES**,[9] criterio mediante el cual la SCJN concluyó que el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del Decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos.

39. Finalmente, al no existir otro motivo de improcedencia planteado, ni advertirse ninguno de oficio, procede realizar el estudio de fondo.

VIII.ESTUDIO DE FONDO

40. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal sostuvo esencialmente que la norma impugnada contraviene los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto y séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X y XXIX, numerales 2 y 5, incisos a y c, y 124 de la CPEUM al establecer el pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento de centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas natural y gas no asociado, lo que constituye un mecanismo de regulación y control que incide directamente en el desarrollo de actividades correspondientes a áreas estratégicas reservadas a la Federación.

41. Visto lo anterior, por orden metodológico, el estudio se dividirá en dos apartados en atención a que el contenido de la norma impugnada tiene relación con la regulación de dos materias distintas: **i)** la materia de hidrocarburos; y, **ii)** la materia de energía eléctrica.

VIII.1. Materia de hidrocarburos

42. Resulta **fundado** el planteamiento del Poder accionante, toda vez que el legislador local carece de competencia para regular la expedición de licencias de funcionamiento en materia de hidrocarburos al tratarse de una atribución reservada a la Federación.

43. Efectivamente, el artículo 25 de la CPEUM[10] establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; asimismo, el párrafo quinto de dicha disposición constitucional prevé que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la CPEUM, para lo cual el

---

[9] Tesis P./J. 38/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, registro digital: 164865.

[10] **Artículo 25**.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

…

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas públicas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

gobierno federal siempre mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.

44. Dicha disposición constitucional invocada también precisa que, tratándose de la planeación y el control de la exploración y extracción de hidrocarburos, la Nación realizará dichas actividades en términos de lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la CPEUM.

45. Ahora bien, en términos del artículo 27, párrafo cuarto de la CPEUM,[11] corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, tales como los combustibles, minerales sólidos, el petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. El párrafo séptimo[12] de esa misma disposición constitucional prevé que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación con un régimen de inalienabilidad e imprescriptibilidad, sin posibilidad de concesiones; no obstante, el Estado puede realizar su exploración y extracción mediante asignaciones a empresas públicas o a través de contratos con éstas o con particulares, conforme a la ley, con el fin de generar ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo del país.

46. A su vez, el artículo 28, párrafo cuarto de la CPEUM[13] dispone que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como la exploración y extracción de hidrocarburos; sin dejar de advertir que su párrafo noveno[14] prevé que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con las atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, en los términos que determine la ley.

---

[11] **Artículo 27**…

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

[12] **Artículo 27**.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

…

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

[13] **Artículo 28**……
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear; el servicio de Internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que realicen las empresas públicas del Estado y las que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

[14] **Artículo 28**…
…
El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con las atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica; así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley.

47. En concordancia con lo anterior, el artículo 73, fracción X de la CPEUM[15] faculta al Congreso de la Unión para legislar en toda la República en materia de hidrocarburos. Además, la fracción XXIX, numerales 2 y 5, incisos a y c, del propio artículo constitucional[16] establece que dicho órgano legislativo tiene la atribución de imponer contribuciones sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales a que se refiere el artículo 27 Constitucional, entre los que se encuentran los hidrocarburos.

48. Por otra parte, de la lectura al artículo 115 Constitucional,[17] se advierte que la competencia municipal tiene un carácter delimitado, ya que la potestad normativa, administrativa y hacendaria de los ayuntamientos se circunscribe a las materias, funciones y servicios públicos expresamente previstos en dicho precepto, sin que entre ellos se incluyan actividades relacionadas con los hidrocarburos, ni con su comercialización, almacenamiento o distribución.

49. Asimismo, si bien el artículo 115, fracción V, inciso f, de la CPEUM reconoce la facultad de los municipios para otorgar licencias y permisos de construcción, dicha atribución se encuentra limitada al uso de suelo cuando se trata de desarrollo territorial o urbanístico, lo que impide extenderla, sin habilitación constitucional expresa, a la expedición de licencias de funcionamiento e, incluso, de construcción, que implique condicionar el inicio o continuidad de las actividades económicas que forman parte de sectores estratégicos cuya regulación exclusiva corresponde a la Federación.

50. Por su parte, el artículo 124 Constitucional[18] establece que las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas a los estados; sin embargo, dicha cláusula residual únicamente resulta operativa cuando

---

[15] **Artículo 73**. El Congreso tiene facultad:
…
X.- Para legislar en toda la República sobre **hidrocarburos**, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

[16] **Artículo 73**. El Congreso tiene facultad:
…
XXIX.- Para establecer contribuciones:
…
2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
…
5º.- Especiales sobre:
…
c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

[17] **Artículo 115**.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
…
V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

[18] **Artículo 124**.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

la materia de que se trate no ha sido expresamente atribuida a la Federación por la propia Constitución; lo cual no se actualiza cuando existe una asignación competencial directa y expresa a favor del ámbito federal, como ocurre en materia de hidrocarburos.

51. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 5, fracción XI[19] de la Ley del Sector Hidrocarburos que define a la cadena productiva como el conjunto de agentes económicos que participan en la proveeduría, el suministro, la construcción y la prestación de bienes y servicios relacionados con esta; pero en particular, con lo previsto por el artículo 9 de dicha norma del Sector Hidrocarburos al establecer que la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía deben ejercer sus facultades de emisión de regulación y de otorgamiento de autorizaciones, aprobaciones y permisos, de forma que se garantice que dichas actividades contribuyan al cumplimiento de la política pública.

52. En concordancia con lo anterior, los artículos 76, fracción II, incisos a, b y c, y 116, fracción I, incisos a, b y c, de la propia Ley del Sector Hidrocarburos[20] establecen que le corresponde a la Comisión Nacional de Energía la labor de regular y supervisar el cumplimiento de los permisos requeridos en la industria de hidrocarburos. Asimismo, el artículo 127 del mismo ordenamiento prevé claramente que **la industria de los hidrocarburos es de jurisdicción federal**, por lo que solo la Federación puede establecer la regulación en la materia.[21]

53. Sin dejar de señalar que, conforme al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, dicho órgano de carácter técnico y sectorizado a la Secretaría de Energía tiene por objeto regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética, con el fin de promover el desarrollo ordenado, continuo y seguro de las actividades del sector energético.

54. Con base en el marco normativo antes invocado, se procede a analizar el contenido del **artículo 36, fracción XIV, numerales 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila** para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual prevé un cobro por la expedición de licencias de funcionamiento de las edificaciones para la extracción del gas natural y gas no asociado.

---

[19] **Artículo 5**.- Para los efectos de esta Ley se entiende, en singular o plural, por:
…
XI. Cadena Productiva: Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la proveeduría, suministro, construcción y prestación de bienes y servicios para la industria de Hidrocarburos;

[20] **Artículo 76.**, Ley del Sector Hidrocarburos: La realización de las actividades siguientes requiere de permiso:
(…)
II. Por parte de la Comisión Nacional de Energía:
a) El procesamiento, licuefacción, regasificación, compresión, descompresión, Transporte, Almacenamiento, Distribución, Comercialización, y Expendio al Público de Gas Natural;
b) La Formulación, Transporte, Almacenamiento, Distribución, Comercialización, Expendio al Público y despacho para autoconsumo de Petrolíferos;
c) Transporte, Almacenamiento y Comercialización de Petroquímicos, y
[…]
Artículo 116., Ley del Sector Hidrocarburos: Corresponde a la Comisión Nacional de Energía:
I. Con base en los criterios vinculantes de planeación incorporados en la política pública, regular y supervisar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Agencia, así como otorgar, modificar, actualizar, suspender y revocar los permisos para las siguientes actividades:
(…)
a) El procesamiento, licuefacción, regasificación, compresión, descompresión, Transporte, Almacenamiento, Distribución, Comercialización y Expendio al Público de Gas Natural;
b) La Formulación, Transporte, Almacenamiento, Distribución, Comercialización y Expendio al Público y despacho para autoconsumo de Petrolíferos;
c) El Transporte, Almacenamiento y Comercialización de Petroquímicos, y
(…)

[21] **Artículo 127**.- La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria.

> 55. Del análisis sistemático de los elementos normativos se advierte que estos configuran un esquema de autorización y control, en la medida en que la expedición de la licencia de funcionamiento constituye una condición necesaria para la operación de las edificaciones para la extracción de gas natural y gas no asociado respectivas.

56. Así, el cobro previsto no se limita a un aspecto meramente recaudatorio o de control ambiental, sino que incide directamente en la posibilidad de que personas físicas y morales desarrollen actividades vinculadas con el sector de hidrocarburos, lo que trasciende el ámbito de las atribuciones municipales e invade las atribuciones reservadas a la Federación.

57. En efecto, de la lectura del precepto impugnado se observa que el Congreso del Estado de Coahuila estableció el cobro de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento aplicables a las edificaciones para la extracción de gas natural y gas no asociado, actividades relacionadas con hidrocarburos.

58. Dicha regulación incide en una materia cuya legislación y potestad tributaria corresponden de manera exclusiva a la Federación, por lo que invade las facultades conferidas al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracciones X y XXIX, numerales 2 y 5, inciso c, de la CPEUM.

59. Así, la inconstitucionalidad identificada radica en que la expedición de la licencia de funcionamiento prevista en el precepto impugnado opera como una condición habilitante para el desarrollo de actividades que, conforme con el diseño constitucional de distribución de competencias, se encuentran reservadas al ámbito federal.

60. Por ello, al sujetar al pago de un derecho municipal la expedición de dichas licencias en sectores como el de hidrocarburos, el Congreso del Estado de Coahuila incide en una materia cuya regulación corresponde de forma exclusiva a la Federación, lo que impide considerar dicho ejercicio como una manifestación válida de las atribuciones municipales previstas en el artículo 115 de la CPEUM y actualiza una invasión a la esfera competencial federal.

61. Por lo tanto, se concluye que el artículo 36, fracción XIV, numerales 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2026, constituye una invasión directa a la esfera competencial federal, en tanto que establece un régimen de autorización y cobro que condiciona el ejercicio de actividades económicas cuya regulación corresponde a la Federación.

62. Además, resulta coincidente la jurisprudencia de rubro: HIDROCARBUROS. EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VINCULADAS CON SU EXPLORACIÓN O EXTRACCIÓN, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN.”[22]

---

[22] **Jurisprudencia P./J. 61/2026 (12a.)**

Hechos: El Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que demandó la invalidez, entre otros, del artículo 20, fracción I, numerales 1, 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ocampo, del Ejercicio Fiscal 2025, que establece el cobro de derechos por la expedición de licencia de funcionamiento vinculadas con edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como por la perforación de pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos

63. En consecuencia, lo procedente es declarar **la invalidez del artículo 36, fracción XIV, numerales 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

VII).2 Materia de energía eléctrica

64. El concepto de invalidez planteado por el Poder actor es **fundado**, toda vez que el **artículo 36, fracción XIV, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, prevé el cobro por la expedición de licencias de funcionamiento respecto de centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares, las cuales constituyen actividades relacionadas con el sector eléctrico.

65. Al respecto, la CPEUM reserva a la Federación la regulación del sistema eléctrico nacional como área estratégica, ya que en términos de sus artículos 25, 27 y 28, **corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional**, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.[23]

66. Por su parte, el artículo 73, fracciones X y XXIX faculta al Congreso de la Unión[24] para **legislar en toda la República en materia de energía eléctrica y establecer**

---

convencionales (roca reservorio) en trampas estructurales donde se encuentre el hidrocarburo, y por la perforación de pozos para la exracción de cualquier hidrocarburo.

En la demanda se argumentó que tales preceptos invaden la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, prevista en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., de la Constitución Federal.

Criterio jurídico: Las normas que prevén el cobro de derechos municipales por la expedición de licencias de funcionamiento vinculadas con la exploración o extracción de hidrocarburos son inconstitucionales, al tratarse de un área estratégica cuya regulación está reservada de manera exclusiva a la Federación para legislar en la materia.

Justificación: De los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los hidrocarburos constituyen un área estratégica cuyo dominio, rectoría y regulación corresponden de manera exclusiva a la Federación, la cual tiene a su cargo la exploración y extracción de dichos recursos, así como la facultad para legislar y establecer contribuciones en esa materia a través del Congreso de la Unión. Cuando en las leyes de ingresos municipales aprobadas por los Congresos Locales se prevé el cobro de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento vinculadas con edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como por la perforación de pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimientos convencionales (roca reservorio) en trampas estructurales donde se encuentre el hidrocarburo, y por la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, inciden en actividades que forman parte del núcleo de esa área estratégica. Por ello, al sujetar su realización al pago de gravámenes locales, tales preceptos resultan inconstitucionales, ya que las entidades federativas invaden la competencia reservada de manera exclusiva a la Federación.

[23] El **artículo 25**, párrafo quinto, de la Constitución establece:
"… **Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica**, (…), la Nación **llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución.**"
Por su parte, **el artículo 27**, párrafo sexto, de la Constitución Política dispone:
"… **Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional** en los términos del artículo 28 de esta Constitución, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; **en estas actividades no se otorgarán concesiones**. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad".
El **artículo 28**, párrafo cuarto, de la Norma Fundamental se determina que:
"No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes **áreas estratégicas**: (…); **la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica** (…)".

[24] **Artículo 73**. El Congreso tiene facultad:
…
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, **energía eléctrica** y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

> **contribuciones en ese ámbito**, lo que confirma el carácter exclusivo de la competencia federal.
>
> 67. Efectivamente, del marco constitucional invocado se advierte que las actividades relativas a energía termoeléctrica, térmica, solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares forman parte de la industria eléctrica,

cuya regulación corresponde de manera centralizada a la Federación.

68. Sobre este tema, el artículo 1o. de la Ley del Sector Eléctrico dispone que dicha legislación tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como las demás actividades del sector eléctrico.

69. En su artículo 3o. fracción XXIII la Ley del Sector Eléctrico define a la generadora de energía como la titular de permisos para producir electricidad en centrales eléctricas; mientras que la fracción LI, inciso c, del mismo artículo, precisa que dichas centrales integran el Sistema Eléctrico Nacional; asimismo, los artículos 11, fracción I, 12, 18 y 19 del mismo ordenamiento[25] atribuyen a autoridades federales la regulación de la generación eléctrica, el otorgamiento de permisos y la planeación vinculante del sector. Estas disposiciones permiten concluir que tanto la generación como la infraestructura eléctrica son competencia exclusiva de la Federación.

70. Ahora bien, con base en lo antes expuesto, se procede a contrastar el contenido del **artículo 36, fracción XIV, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, el cual establece el cobro de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento respecto de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares.

71. En tales términos, el legislador local configura un esquema de cobro vinculado al funcionamiento y continuidad de actividades dentro del sector eléctrico.

…
XXIX.- Para establecer contribuciones:
…
2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
…
5º.- Especiales sobre:
a).- Energía eléctrica; (…)

[25] "**Artículo 3**.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: […]
XXIII. Generadora: Persona titular de uno o varios permisos para generar electricidad en Centrales Eléctricas con la autorización de la CNE, o bien, titular de un contrato de Participante del Mercado que representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a dichas centrales o, con la autorización de la Secretaría, a las Centrales Eléctricas ubicadas en el extranjero." […]
LI. Sistema Eléctrico Nacional: El sistema que comprende la infraestructura integrada por; […]
c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; […]
Artículo 11.- La CNE está facultada para:
I. Otorgar los permisos a los que se refiere esta Ley, con excepción de las autorizaciones de importación y exportación, considerando los criterios de planeación vinculante del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría, y resolver sobre su modificación, revocación, cesión, prórroga o terminación; […]
Artículo 12.- La planeación del sector eléctrico tiene carácter vinculante y está a cargo de la Secretaría, autoridad que debe elaborar el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, en términos de esta Ley y la Ley de Planeación y Transición Energética. La planeación vinculante, en el sector eléctrico, debe considerar los siguientes principios: […]
Artículo 18.- Para realizar la actividad de generación a través de las figuras señaladas en las fracciones II y III del artículo anterior se requiere permiso otorgado por la CNE.
El permiso de generación puede comprender la modalidad de cogeneración en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 19.- Todas las Centrales Eléctricas con capacidad igual o mayor a 0.7 MW deben contar con permiso de generación vigente en los términos establecidos en esta Ley.
Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.7 MW son Generadoras Exentas y no requieren permiso para generar energía eléctrica.
Las Centrales Eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias o durante interrupciones en el Suministro Eléctrico de Centros de Carga conectados a la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución no requieren permiso."

72. Por tanto, del análisis del precepto impugnado se advierte que el Congreso del Estado de Coahuila previó el cobro de derechos sobre un ámbito vinculado directamente con la materia de energía eléctrica. En específico, estableció el cobro de derechos por la expedición de licencias municipales de funcionamiento, cuando dichos actos recaen en centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares.

73. En este sentido, el cobro no se limita a una función recaudatoria, sino que incide directamente en la posibilidad jurídica de desarrollar actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica. De este modo, la norma municipal trasciende el ámbito administrativo local y se inserta en la regulación material de un sector estratégico reservado a la Federación, ya que si bien, en términos del artículo 115, fracción V de la CPEUM, los municipios cuentan con facultades hacendarias, de desarrollo urbano, para ejercer funciones de control ambiental, cobrar derechos por servicios administrativos locales y para otorgar licencias de construcción, dichas potestades no implican condicionar, regular o gravar de manera específica la expedición de licencias de funcionamiento destinadas a la prestación de servicios de energía eléctrica.[26]

74. De esta forma, el cobro por la expedición de licencias de funcionamiento, previsto en el **artículo 36, fracción XIV, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, opera como una condición habilitante para actividades en materia eléctrica, lo que implica sujetarlas al pago de un derecho municipal sin fundamento constitucional válido; lo anterior actualiza una invasión directa de competencias, pues el municipio condiciona el ejercicio de facultades reservadas a la Federación en términos de los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIX, numerales 2 y 5, inciso a, de la CPEUM.

75. Al respecto, esta SCJN estableció la jurisprudencia de rubro: ENERGÍA ELÉCTRICA. EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VINCULADAS CON SU GENERACIÓN, TRANSMISIÓN O DISTRIBUCIÓN, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN.[27]

76. No pasa inadvertido que el Poder Legislativo local sostiene que la disposición impugnada regula derechos derivados de licencias de funcionamiento en materia de control ambiental. Al respecto, este Tribunal Pleno reconoce que los municipios conservan atribuciones ordinarias en materia de uso de suelo, construcciones, funcionamiento de establecimientos y protección ambiental; sin embargo, cuando la legislación local identifica expresamente infraestructura destinada a la extracción de hidrocarburos o a la generación de energía eléctrica y establece respecto de ella una licencia y un cobro anual específico por unidad, deja de operar como una regulación administrativa general e incide directamente en actividades sujetas a jurisdicción federal. Los mecanismos de coordinación previstos en la legislación energética deben ejercerse dentro del ámbito competencial de cada orden de gobierno y no habilitan la creación de regímenes municipales autónomos de autorización o cobro.

---

[26] Consideraciones análogas fueron sostenidas en la controversia constitucional 104/2026, misma que fue votada en la sesión de Pleno el veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

[27] Jurisprudencia P./J. 60/2026 (12a.), Duodécima Época, mayo de 2026, Tomo I, Volumen 1, página 236, registro digital: 2032089.

> 77. A mayor abundamiento y en concordancia con lo expuesto, el artículo 127 de la Ley del Sector Hidrocarburos incluye expresamente dentro de la jurisdicción federal las disposiciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección ambiental de esa industria.[28]

78. En relación con todo lo expuesto, al resolver la **controversia constitucional 121/2026,**[29] en sesión de **seis de julio de dos mil veintiséis**, esta SCJN declaró la invalidez de una norma de estructura y contenido normativo sustancialmente idénticos a la impugnada en este asunto y que difiere únicamente en la tarifa impuesta, concretamente, el artículo 21, fracción I, numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez, Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2026, publicada en el Periódico Oficial local el **veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco**, al considerar que los cobros anuales por licencias de funcionamiento recaían específicamente sobre edificaciones productoras de energía eléctrica y sobre instalaciones destinadas a la extracción de gas natural y gas no asociado, actividades e infraestructura cuya regulación, autorización, supervisión y verificación corresponden exclusivamente a la Federación. Aunque los cobros se presentaban formalmente como derechos municipales relacionados con el funcionamiento de establecimientos o el control ambiental, materialmente imponían cargas económicas sobre los sectores eléctrico y de hidrocarburos, con lo que el Congreso local excedió las atribuciones municipales e invadió la competencia federal.

79. El anterior criterio se reiteró al resolver las controversias constitucionales **105/2026,**[30] **90/2026**, **109/2026**, **116/2026**, **134/2026,**[31] **92/2026, 111/2026, 119/2026, 120/2026,**[32] **85/2026, 137/2026 y 139/2026,**[33] que resultan particularmente aplicables al presente asunto, pues en esos precedentes se analizaron disposiciones de Leyes de Ingresos municipales del **estado de Coahuila de Zaragoza** que establecían cobros por licencias de funcionamiento respecto de instalaciones relacionadas con los sectores eléctrico y de hidrocarburos que constituían un régimen municipal de autorización y cobro en materias reservadas a la Federación. Dada la similitud normativa y la identidad del marco hacendario aplicable, esas consideraciones resultan trasladables al caso concreto.

80. Conforme a lo expuesto, si la norma en análisis condiciona al pago de un derecho municipal una actividad cuya regulación corresponde de forma exclusiva a la Federación, con motivo de la expedición de licencias de funcionamiento de centrales productoras de energía y respecto de edificaciones destinadas a la extracción de gas natural y gas no asociado, resulta claro que el legislador local invadió las facultades federales, por lo que resulta inconstitucional.

---

[28] "**Artículo 127.-** La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero**,** el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria.
Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en los términos de esta Ley, en todo momento deben seguirse criterios que fomenten la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, además de cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en materia de medio ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así como de pesca."

[29] Controversia constitucional 121/2026, se aprobó por unanimidad de nueve votos de las personas ministras; no obstante, la Ministra Batres Guadarrama anunció voto concurrente; el Ministro Figueroa Mejía votó a favor, pero con las consideraciones a las que hizo alusión en su intervención, con relación a la materia de energía eléctrica.

[30] Fallada por unanimidad en sesión del ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

[31] Falladas por unanimidad en sesión del tres de septiembre de dos mil veintiséis.

[32] Falladas por unanimidad en sesión del cuatro de agosto de dos mil veintiséis.

[33] Falladas por unanimidad en sesión del seis de julio y ocho de octubre de dos mil veintiséis.

81. Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que el **artículo 36, fracción XIV, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026,** expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, resulta inconstitucional al establecer un régimen de autorización y cobro específicamente referido a infraestructura de los sectores de electricidad e hidrocarburos.

82. Adicionalmente, la actual integración de esta SCJN ha declarado la invalidez de normas locales que invaden la competencia federal por regular la expedición de licencias de funcionamiento en materia de energía eléctrica e hidrocarburos, al resolver la controversia constitucional **4/2026**.[34]

83. En tal sentido y al resultar fundados los planteamientos del Poder actor respecto de la invasión de competencia federal, resulta innecesario examinar el resto de los conceptos de invalidez pues su estudio en nada cambiaría la conclusión alcanzada. Sirve de apoyo la **jurisprudencia P./J. 100/99,[35]** emitida por el Pleno de esta SCJN, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.

84. Por tanto, se declara la **invalidez del artículo 36, fracción XIV, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026,** expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

IX. EFECTOS

85. El artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la ley reglamentaria de la materia[36] señalan que las sentencias deben contener los alcances y los efectos de estas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos los elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda; además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos y éstos deberán extenderse a todas las normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

86. **Declaratoria de invalidez**. En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la **invalidez del artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, expedida mediante Decreto 358,

---

[34] Fallada en sesión del cuatro de agosto de dos mil veintiséis.
[35] Jurisprudencia P./J. 100/99, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 705, registro 193258.
[36] **Artículo 73**. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
(…)
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales, actos u omisiones respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;
(…)
Artículo 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.
(…)
Artículo 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.
Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado.
Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

publicado en el Periódico Oficial local el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

87. **Invalidez por Extensión:** Al resolver la controversia constitucional 198/2026,[37] este Tribunal Pleno determinó que resultan inconstitucionales los cobros municipales específicamente dirigidos al otorgamiento de licencias de construcción para estaciones de servicio y de carburación. De igual forma, en la controversia constitucional 153/2026,[38] extendió horizontalmente la invalidez a una disposición relativa a gasolineras, por reproducir un esquema equivalente de autorización y cobro sobre actividades integrantes de la cadena de valor de los hidrocarburos.

88. En el caso que nos ocupa**, los artículos 20, fracción V[39]y 36 fracción XI, numeral 2[40] de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, actualizan el mismo vicio competencial, pues lejos de constituir una regulación urbana general, el primero establece el cobro de un derecho por licencia de construcción de infraestructura en el sector eléctrico y el segundo establece el pago anual de una licencia de Funcionamiento y registro en el Padrón Municipal de los establecimientos industriales (gaseras y gasolineras), ambos artículos someten a un régimen específico de autorización municipal. Por esa relación horizontal e identidad de afectación constitucional, **procede extender la invalidez** a dicha norma, toda vez que guarda relación material y horizontal con la porción normativa impugnada de manera directa.[41]

89. Lo anterior, debido a que dichas disposiciones prevén el cobro de derechos por la expedición de licencias de permisos de construcción, instalación y remodelación, así como licencias de funcionamiento, respecto de las mismas actividades reguladas en el **artículo 36, fracción XIV, numerales 1 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, es decir, comparten la misma finalidad y producen el mismo efecto jurídico, al constituir mecanismos de autorización que condicionan el desarrollo de actividades pertenecientes a sectores estratégicos cuya regulación corresponde de manera exclusiva a la Federación.

90. En consecuencia, al actualizar el mismo vicio de inconstitucionalidad, su invalidez resulta necesaria para asegurar la plena eficacia de esta resolución y evitar la subsistencia de disposiciones contrarias al orden constitucional.

---

[37] Resuelta en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2026. Se aprobó por mayoría de siete votos; el Ministro Figueroa Mejía votó en contra y el Ministro Presidente Hugo Aguilar no estuvo presente.

[38] Resuelta en sesión celebrada el 2 de septiembre de 2026. Se aprobó por mayoría de ocho votos; el Ministro Figueroa Mejía votó en contra.

[39] **ARTÍCULO 20.-** Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes y se cubrirán conforme a la tarifa en cada uno de ellos señalada: […]
V.- Por la expedición de permiso de construcción y remodelación de las instalaciones que sean centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores, etc. Se cobrará la cantidad de $ 66,954.00 por permiso para cada unidad

[40] **ARTÍCULO 36.-** Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales.
Los servicios a que se refiere esta sección causarán derechos desde 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y que se detallan de la manera siguiente:
XI.- Licencia de Funcionamiento y registro en el Padrón Municipal de los establecimientos instalados:
(…)
2. Industrial (gaseras y gasolineras Pago anual) $ 3,889.00.

[41] CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS**.** Tesis: P./J. 53/2010, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 1564, registro digital 164820.

91. **Fecha en que surtirá efectos la invalidez**. Por otra parte, el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia establece que no es posible otorgar efectos retroactivos en una controversia constitucional, excepto en materia penal. De esta forma, esta SCJN determina que la presente declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila.

92. **Notificación al Municipio:** Por último, deberá notificarse esta sentencia al municipio involucrado, por ser la autoridad encargada de la aplicación de la ley de ingresos cuya disposición fue invalidada.

X. DECISIÓN

Por lo antes expuesto y fundado, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Es **procedente y fundada** la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se declara la **invalidez** del **artículo 36, fracción XIV, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

TERCERO. Se declara la **invalidez, por extensión** de los **artículos 20, fracción V y 36 fracción XI, numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026**, expedida mediante Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos precisados en el apartado VIII de esta determinación.

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución por medio de oficio a las partes; devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

En términos de lo previsto en los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.